

## Fiscalidad y Ciclo Presupuestal en Uruguay: Lecciones, desafíos y recomendaciones

**Gabriel Oddone, Sebastián Ithurralde, Agustín Iturralde y Joaquín Torres**

La actividad económica del Estado incluye distintas formas de intervención a través de las cuales incide en las decisiones económicas. Debido a ello, el rol de las políticas macroeconómicas es objeto de debate en ámbitos académicos y de la profesión de las ciencias económicas en general.

En Uruguay, como es lógico, las políticas económicas resultan claves para comprender el desempeño económico. Una lección aprendida del pasado reciente, es que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para alcanzar crecimientos del PIB que puedan soportar los niveles de prosperidad y cohesión social que sus habitantes demandan. La limitada capacidad de la política monetaria en Uruguay debido a la dolarización de la economía, le asigna un papel central a la política fiscal en la estabilización macroeconómica.

Con matices y diferencias, los sucesivos gobiernos de Uruguay han mantenido unas políticas económicas durante cuatro décadas caracterizadas por la apertura económica, la estabilidad macroeconómica y el mantenimiento de reglas de juego estables y predecibles.

Sin embargo, el consenso construido alrededor de esos grandes objetivos es hoy insuficiente para que Uruguay se diferencie en la región y siga siendo atractivo como destino de inversiones. Ya no alcanza con ser un país predecible y estable políticamente, respetuoso de las decisiones de inversión, que procura mantener la inflación bajo control, que es responsable con sus obligaciones y que tiene vocación por abrirse al mundo.

Uruguay debe recuperar el crecimiento de su economía. En ausencia de un crecimiento de por lo menos 3% anual, el *Estado del Bienestar* del cual sus ciudadanos se sienten orgullosos podría dejar de ser sostenible, limitando las posibilidades de enfrentar los grandes desafíos que el país tiene en materia de integración e inclusión social. Por eso, el nuevo gobierno deberá concentrarse en implementar una agenda procrecimiento para el período 2021.

Esta agenda procrecimiento debe incluir, entre otras cosas, una mayor consistencia de la política macroeconómica, algo que se fue perdiendo progresivamente luego de 2012. La recuperación de esta consistencia macroeconómica requiere, además de otras acciones, que la política fiscal vuelva a ser el ancla que garantice la estabilidad.

Para despejar los riesgos asociados a la actual situación fiscal (elevado déficit fiscal y aumento sostenido de la deuda pública) es necesario definir una estrategia que combine acciones de corto, mediano y largo plazo. Debido a que la economía política de un camino como el

sugerido es compleja, el gobierno deberá definir prioridades, establecer la secuencia de implementación e identificar cómo superar las naturales resistencias que una agenda de este tipo despertará.

Bajo este esquema, el trabajo *“Fiscalidad y Ciclo Presupuestal en Uruguay: Lecciones, desafíos y recomendaciones”* pone el foco sobre las medidas de mediano plazo, destinadas a fortalecer la institucionalidad responsable de la gestión de las finanzas públicas. En este sentido, pretende identificar los principales desafíos para fortalecer el marco institucional y de gestión de las finanzas públicas en Uruguay. Entre los desafíos identificados, que sientan la base para el conjunto de recomendaciones que desarrolla el trabajo, es necesario mencionar al menos cuatro.

En primer lugar, es preciso revisar las reglas que gobiernan el ciclo presupuestal lo que, a su vez, supone: i) acelerar la adopción de herramientas para gestionarlo de forma más eficaz; ii) avanzar más rápidamente en las mejoras de los sistemas de información y gestión financiera del Estado y; iii) revisar los niveles de responsabilidad y los tiempos que insume el proceso presupuestal que hoy sigue estando fragmentado y prevé tiempos de aprobación muy extensos.

En segundo lugar, se deben impulsar cambios en la contabilidad pública para favorecer un tratamiento contable de los egresos y los pasivos del sector público más riguroso y transparente para la gestión fiscal.

En tercer lugar, se requiere revisar el marco de funcionamiento y gobernanza de las empresas públicas, de modo de apuntalar su eficiencia y hacer más transparente las reglas que regulan su relación con el Poder Ejecutivo.

Finalmente, parece recomendable implementar una regla fiscal más restrictiva que la que está vigente.

Como consecuencia de lo anterior, en el trabajo se proponen: i) acciones para mejorar la asignación, ejecución y evaluación del gasto público; ii) mecanismos para fortalecer el proceso presupuestal; iii) cambios en la atribución de responsabilidades institucionales para el diseño, la gestión y el control de las finanzas públicas y; iv) herramientas alternativas para evitar trayectorias insostenibles del gasto público.